

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

ALEXANDRA FERNÁNDEZ GÓMEZ, *Diputada del GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA*, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita **respuesta por ESCRITO *relativa* a ayudas públicas a la industria de la automoción, entre ellas PSA Peugeot-Citroën.**

Uno de los últimos datos que existen sobre el reparto de ayudas públicas a empresas corresponde al año 2012, que señala que las empresas se repartieron en 2012 más de 3.000 millones de euros en forma de subvenciones públicas. El 69,8 % de ellas, unos 2.122 millones, para pymes, y, el resto fue a parar a varias multinacionales. El cómputo realizado por la agencia de calificación de rating Axesor incluye las ayudas estatales y las correspondientes a gobiernos autonómicos.

Dadas las cifras, las empresas más subvencionadas fueron las del sector automovilístico Peugeot España, que acumuló 66,7 millones de euros que proceden de cinco subvenciones. Le siguieron, la minera Unión Minera del Norte, que ingresó de las arcas públicas 29,33 millones de euros; Hunosa, con otros 27,5 millones; Telefónica, con 23,9; Renault España, con 23,5; Iveco España, con 20; Coto Minero Cantábrico, con 19,8; Agroseguro, con 19,2; EADS, con 17,7; y Unión Fenosa Distribución, con 16,9 millones de euros.

En un escalón inferior, figuraba otra serie de empresa de diversa índole.

Algunas de las ayudas del estado a empresas automovilísticas como PSA Peugeot-Citroën, se otorgaron en el año 2011 en forma de "créditos blandos", distribuidos por el Gobierno mediante el Plan de Competitividad del Automóvil entre los fabricantes de coches.

Sabemos que en el caso concreto de PSA Peugeot-Citroën, recibió una aportación reembolsable de más de 35 millones de euros para financiar sus proyectos en el estado español. Así, se le asignó 18,09 millones para un plan de movilidad eléctrica de la planta de Vigo, 8,51 millones para un programa de eficiencia energética también en Vigo y 8,49 millones para el plan de competitividad del centro de Madrid.

Estas ayudas en forma de créditos 'blandos' tenían por objeto apoyar el desarrollo de proyectos de fabricantes de coches y componentes vinculados a la mejora de la competitividad y al fomento de la I+D+I (investigación, desarrollo e innovación).

Es público y notorio que la Xunta de Galicia concede importantes ayudas públicas a la planta de Vigo.

Bajo el mandato de mayoría absoluta del PP, durante la legislatura comprendida entre 2011 y 2015, así como durante el Gobierno en funciones, no han trascendido con transparencia datos relativos a las ayudas estatales a empresas del sector del automóvil, que sería interesante conocer en detalle a fin de realizar un control sobre las mismas.

La planta de PSA Peugeot-Citroën en Vigo aprobó un ERE hace unos años, así como recortes de plantilla que consideramos no obedecían stricto sensu a razones de índole económico. Al igual que llevó a cabo reestructuraciones supuestamente fundamentadas en la crisis económica y sus efectos sobre el sector, sobre las que tenía que haber existido un mecanismo de vigilancia en el caso de mediar ayudas públicas.

Aun tratándose de una empresa privada, en el momento en el que se perceptora de subvenciones o ayudas públicas debe ser objeto de control por parte de los distintos Gobiernos. Deducimos que las ayudas se otorgarán en base a unos criterios de mantenimiento de puestos de trabajo, de mejoras laborales y de dinamización económica en el terreno en el que se asientan. No creemos que se concedan ayudas a fondo perdido. Deben contemplarse unas condiciones que de no cumplirse, darían a las distintas Administraciones motivos para demandar la devolución de las ayudas concedidas. Y es de suponer, que las cuestiones laborales deben figurar entre las prioridades a cumplir.

En este sentido, cabe resaltar la actitud exigente y estricta de la Administración lusa a la hora de pedir compensaciones por las subvenciones destinadas al sector. Para muestra un botón: en el año 2012 el Gobierno de Portugal decidió retirar las ayudas fiscales concedidas a la factoría de PSA Peugeot Citroën de Mangualde por incumplir un plan de inversión que recibió el aval del Estado portugués.

No nos consta que la Administración española haya actuado de este modo en algún momento, a pesar de la reestructuración que se llevó a cabo en la planta.

Entre los trabajadores y trabajadoras de Vigo del sector del automóvil, existe una honda preocupación por su futuro laboral y que permanece como una espada de Damocles. En los últimos cinco años, las prácticas de la empresa automovilística han provocado la pérdida del 30% del empleo en la comarca de Vigo. Muchas de las empresas auxiliares se han trasladado a Portugal.

La instalación de empresas auxiliares del sector en Portugal es una realidad que avanza cada vez más desde hace unos años y que tiene su origen en la forma de actuar de la empresa matriz, PSA Peugeot Citroën que ejerce un enorme chantaje en materia de precios a las auxiliares, pujando siempre a la baja. Este factor es una de las razones del traslado de empresas a suelo portugués.

El sector de componentes de automoción genera una importante cifra de facturación y

empleados directos en Galicia. La industria registra unas ventas anuales de cerca de 3.000 millones de euros. Y se calcula, según datos de 2016, que la plantilla de trabajadores en el territorio gallego ronda los 12.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:

¿Ha concedido el Gobierno ayudas o subvenciones a empresas del sector automovilístico desde el año 2012 hasta la actualidad? De ser así, ¿Puede detallar que tipo de ayudas se concedieron? ¿Puede aportar información concreta de las cuantías otorgadas y distribuidas por empresas?

¿Recibieron las dos plantas de PSA Peugeot-Citroën ubicadas en el estado español, la de Vigo y la de Madrid, ayudas del estado? De ser así, ¿En qué consistieron? ¿Cuáles fueron las cuantías? ¿A qué estaban destinadas? ¿Qué condiciones se establecieron para la concesión de dichas ayudas? ¿Ha hecho el Gobierno un seguimiento de su cumplimiento? ¿Figuraban entre dichas condiciones cuestiones laborales como la obligación de mantenimiento de los puestos de trabajo y la mejora de las condiciones laborales?

¿En algún momento, y ante la realización de reestructuraciones de plantillas, ha exigido el Gobierno la devolución de las ayudas públicas otorgadas al sector del automóvil? ¿Se ha dado el caso con PSA Peugeot-Citroën? ¿Qué control ejerce el Ejecutivo de las ayudas otorgadas?

¿Ha mantenido el Gobierno encuentros con el sector del automóvil, en concreto con PSA Peugeot Citroën para abordar el constante traslado de empresas auxiliares a Portugal? ¿Ha analizado el Gobierno esa situación? ¿A qué cree que es debido? ¿Es consciente de la enorme presión que ejerce la empresa matriz, PSA Peugeot Citroën en materia de precios, presionando constantemente a la baja? ¿Qué valoración realiza de este hecho?

8 de febrero de 2017.



Alexandra Fernández Gómez

Diputada por Pontevedra Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea